
Amnistía Internacional

República Popular de China Región Autónoma del Tíbet: acceso denegado



Índice AI: ASA 17/085/2008

República Popular de China

Región Autónoma del Tíbet: acceso denegado

Desde el estallido de la violencia en marzo en la Región Autónoma del Tíbet y las zonas con población tibetana de las provincias vecinas, la zona continúa estando prohibida para los turistas extranjeros, la mayoría de los periodistas, y otros observadores independientes. Según las declaraciones públicas oficiales, desde el comienzo de los disturbios más de un millar de personas continúan detenidas sin que haya informes de que se hayan presentado cargos contra ellas ni hayan sido juzgadas tras las protestas, que aún continúan. Según informaciones fiables de organizaciones tibetanas y de los medios de comunicación, las personas que participaron en las protestas han sufrido torturas u otros tipos de malos tratos bajo custodia o han resultado heridas o muertas debido al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. A muchas personas detenidas se les ha negado el acceso a sus familiares o abogados. Si bien los informes oficiales chinos continúan mencionando un “insurgente” tibetano muerto y responsabilizando a los “alborotadores” de 21 muertes, el Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia (TCHRD, por sus iniciales en inglés) estima que el uso excesivo de la fuerza en la represión de los manifestantes provocó cerca de 120 muertos, mientras que el gobierno tibetano en el exilio eleva esta cifra a más de 200.

A pesar de las promesas del gobierno chino de una total libertad de prensa antes de los Juegos Olímpicos, en estas zonas sigue en vigor un bloqueo informativo, con la desconexión o el bloqueo de Internet, los teléfonos móviles, las emisiones de TV y otras formas de comunicaciones. La respuesta inicial del gobierno al terremoto de Sichuan permitió mayor acceso a los medios de comunicación, pero la reciente restricción de los informes sobre el terremoto considerados delicados ha vuelto a poner en tela de juicio el compromiso de las autoridades con la transparencia. Durante el paso de la antorcha olímpica por Lhasa, la capital de la Región Autónoma del Tíbet, los periodistas y turistas extranjeros obligados a irse en marzo seguirán sin poder acceder a la región.

Al haber cerrado las autoridades el acceso a las zonas de población tibetana de China Occidental, resulta imposible para Amnistía Internacional confirmar los detalles de los informes de violaciones de derechos humanos. La organización tampoco puede conciliar las contradicciones existentes entre la limitada información proporcionada por los informes oficiales y la información de las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación. Con esta situación, resulta imprescindible que las autoridades chinas abran la zona a observadores independientes.

Bloqueo informativo en torno a las regiones chinas de población tibetana

El 10 de marzo, los monjes budistas tibetanos comenzaron sus protestas en Lhasa, que se volvieron violentas el 14 de marzo, al parecer cuando se unieron a ellos seculares y algunos manifestantes tibetanos hicieron víctimas de sus ataques a los chinos de etnia han, destruyendo tiendas y edificios oficiales, así como otras propiedades que consideraba de propiedad han. El gobierno chino informa de que 18 personas y un agente de policía resultaron muertas en los disturbios que se produjeron en Lhasa el 14 de marzo y que posteriormente se extendieron por toda la Región Autónoma del Tíbet y por las regiones de población tibetana de las provincias vecinas.¹

Los estrictos controles gubernamentales sobre el flujo de información hacia y desde la Región Autónoma del Tíbet y zonas limítrofes desde el comienzo de las protestas hacen imprescindible que las autoridades chinas permitan que se realice una investigación independiente para conseguir información concreta sobre la identidad y la situación de las personas detenidas, heridas o muertas durante los disturbios. El gobierno chino expulsó a periodistas y turistas de la zona después del 10 de marzo. Excepto en tres visitas de los medios de comunicación organizadas por el gobierno los días 27 y 28 de marzo, 9 de abril y 6 de junio, la Región Autónoma del Tíbet y zonas vecinas de población tibetana continúan cerradas a los turistas y periodistas extranjeros más de tres meses después del estallido de los disturbios. Durante la primera visita, el 27 de marzo, cuando las autoridades chinas invitaron a determinados periodistas extranjeros a recorrer Lhasa bajo estricta supervisión oficial, entre 20 y 30 monjes irrumpieron el recorrido, por lo demás estrictamente controlado, gritando “¡Tíbet no es libre!” y pidiendo la libertad religiosa en el Tíbet. El 6 de junio, el gobierno invitó sólo a periodistas de Hong Kong y Taiwán a visitar Lhasa durante un día. Una periodista que llevó a cabo la visita, informó de que había podido pasear y entrevistar a quien quiso, aunque no se había permitido a los periodistas salir de Lhasa. Un reducido número de periodistas han entrado en la región sin permiso oficial y han proporcionado otra visión de la situación. Pero, como afirmó el 12 de junio el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, “Lhasa y todo el Tíbet

¹ Según las estadísticas oficiales chinas, a finales de 2007 la Región Autónoma del Tíbet tenía 2,84 millones de habitantes, de los que el 95,3 por ciento (más de 2,5 millones) eran tibetanos. Véase “Facts and Figures: Tibet’s Current population”, en www.chinaview.cn, 11 de abril de 2008. Las zonas tradicionalmente tibetanas de Amdo y Kham en la actualidad se extienden por las provincias vecinas de Gansu, Qinghai, Sichuan y Yunnan. Según los informes, la población tibetana de estas provincias se acerca a otros 3 millones más. Véase U.S. State Department, Country Reports on Human Rights Practices - 2007, <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100518.htm>.

siguen cerrados al mundo exterior”.² Esto refleja el férreo control del gobierno sobre los medios de comunicación durante el recorrido de la antorcha olímpica por la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, el 17 de junio. En aquella ocasión, los periodistas extranjeros estuvieron acompañados por funcionarios chinos y no pudieron moverse solos por la zona.³

Con los controles del gobierno ha llegado incluso a resultar difícil que personas de la Región Autónoma del Tíbet y las zonas de población tibetana circundantes proporcionen información a personas del exterior mediante el teléfono, Internet y otras formas de comunicación. Fuentes fiables afirman que la policía y las fuerzas de seguridad han confiscado teléfonos móviles, ordenadores y demás equipos electrónicos de comunicaciones en cientos de registros en monasterios de monjes y monjas y domicilios privados. Además, los particulares se arriesgan a ser detenidos y encarcelados por transmitir al exterior cualquier tipo de información sobre las protestas y la represión. Según Radio Free Asia (RFA), Nyima Drakpa, tibetano, fue detenido el 19 de abril en la comarca de Daofu (Tawu), provincia de Sichuan, por pasar presuntamente información y fotos de las protestas tibetanas a periodistas de Hong Kong.⁴ Más de un mes después aún no se ha permitido a sus familiares ponerse en contacto con él.⁵ Amnistía Internacional ya había documentado en ocasiones anteriores las largas condenas impuestas a tibetanos por pasar presuntamente información a periodistas u organizaciones extranjeros.⁶ Los familiares de las personas detenidas suelen optar por no comunicar información concreta por temor a empeorar el trato que sus familiares reciben bajo custodia o complicar su caso. Las autoridades chinas han restringido la posibilidad de viajar de los residentes tibetanos de la región, limitando los viajes a la capital de los residentes fuera de Lhasa, y los viajes al extranjero de los tibetanos.

² AFP, “China says Tibet still off-limits to foreigner,” 12 de junio.

³ “Security Heavy for Olympic Flame in China”, AP, 18 de junio.

⁴ Radio Free Asia facilita números de teléfono gratuitos a través de los cuales las personas en el extranjero pueden llamar desde teléfonos públicos, lo cual proporciona un importante grado de anonimato a la persona que llama. La organización tiene cintas de las conversaciones que tienen con estas personas y que constituyen una valiosa fuente de información, aunque a menudo difícil de confirmar.

⁵ Informe de RFA, “Tibetan Detained for Media Contact”, 27 de mayo de 2008.

⁶ Véanse, por ejemplo, los documentos de Amnistía Internacional *República Popular de China. La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: Represión de manifestantes tibetanos* (Índice AI: ASA 17/070/2008); *China: Human rights defenders at risk* (Índice AI: ASA 17/045/2004); *UN Human Rights Council: Seventh Session - 3-28 March 2008: Compilation of statements by Amnesty International (including joint statements)* (Índice AI: IOR 41/010/2008); y *15 monjes: Temor de tortura y otros malos tratos*, (Índice AI: ASA 17/057/2008).

La dificultad de conseguir información fiable debido a las restricciones del flujo de información impuestas por las autoridades chinas subrayan la necesidad de que la ONU y otros observadores independientes accedan a la zona y lleven a cabo una tarea de observación creíble e imparcial de los acontecimientos.

Detenciones, palizas y uso de medios letales contra manifestantes pacíficos

El Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia, el gobierno del Tíbet en el exilio y otras organizaciones han informado de que las fuerzas de seguridad han disparado contra manifestantes pacíficos en numerosas ocasiones y en diferentes lugares de las regiones de China con población tibetana. Esto ha sucedido en Lhasa los primeros días de las protestas y en las provincias vecinas durante los últimos meses. Según este organismo, las fuerzas de seguridad chinas han matado a cerca de 120 manifestantes tibetanos golpeándolos y disparando fuego real contra manifestantes pacíficos, mientras que el gobierno del Tíbet en el exilio estima la cifra en más de 200. La Policía Armada Popular y las fuerzas de seguridad armadas han golpeado y herido a cientos de personas más, golpeándolas con barras de hierro, propinándoles culatazos y patadas, y disparando contra ellas.⁷ Según los informes, tras la violencia de los primeros días de disturbios los manifestantes tibetanos se comportaron en su mayoría pacíficamente, sobre todo tras los llamamientos del Dalai Lama para que no recurrieran a la violencia, el primero de los cuales hizo el 14 de marzo.

Ciertas localidades han sido escenario de protestas especialmente frecuentes y de contundentes respuestas por parte de las fuerzas de seguridad. Esto ha sucedido en la comarca de Ngaba (Aba) y en la de Kardze (Ganzi), ambas en la provincia de Sichuan. El Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia informó que el 16 de marzo agentes armados de las fuerzas de seguridad dispararon y mataron a 23 personas, entre las que figuraba Lhundup Tso, estudiante de 16 años, tras una protesta pacífica en la comarca de Ngaba, provincia de Sichuan. Se facilitaron los nombres y las fotos de las personas fallecidas después de trasladarlas al monasterio de Kirti, en Ngaba.⁸ El Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia informó también de la muerte a tiros de tres personas a manos de la policía el 18 de marzo, también en la comarca de Kardze (Ganzi), en la provincia de Sichuan, durante

⁷ La Policía Armada Popular es la principal fuerza de seguridad interior de China, liderada por la Comisión Central del Ejército del Partido Comunista Chino y al mismo tiempo por el Consejo de Estado. Sus agentes van armados con revólveres. Las fuerzas de seguridad pública, dependientes del Ministerio de Seguridad Pública, son la principal fuerza policial de China. El Ministerio tiene departamentos que se ocupan de los servicios de información, las operaciones policiales, las prisiones y las comunicaciones.

Véase Global Security.org: <http://www.globalsecurity.org/intell/world/china/mps.htm>.

⁸ TCHRD, "Middle school student shot dead in Ngaba County," 19 de marzo.

las manifestaciones pacíficas de varios cientos de residentes de la zona, monjes y monjas.⁹ Según los informes, otros 8 tibetanos murieron y decenas resultaron heridos el 3 de abril al disparar la policía armada con fuego real contra manifestantes pacíficos cerca del monasterio de Tongkhor, también en la comarca de Kardze (Ganzi).¹⁰

En los últimos meses, testigos presenciales han informado en Kardze (Ganzi) de palizas a decenas de manifestantes pacíficos, a los que a veces dispararon con consecuencias letales y se llevaron, a menudo a lugares desconocidos. Un testigo informó a Radio Free Asia sobre la paliza dada el 23 de abril a dos monjas –Bumo Lhaga, de 32 años, y Sonam Dekyi, de 30– del monasterio de Drakkar, en la comarca de Kardze (Ganzi):

Las fuerzas de seguridad chinas las rodearon [a las dos monjas] y las golpearon.

A una de ellas, Lhaga, la agredieron brutalmente, golpeándole la cabeza contra el suelo. Sangraba mucho. En el lugar donde las monjas fueron detenidas y golpeadas, el pavimento estaba manchado de sangre.¹¹

Según una fuente tibetana del exilio, las fuerzas de seguridad respondieron utilizando la fuerza a la protesta pacífica de más de 50 monjas el 14 de mayo. “Policías y soldados respondieron violentamente a la protesta y las monjas fueron detenidas en el acto. Muchas fueron brutalmente golpeadas y en la calle había manchas de sangre. Los hábitos y las sandalias de las monjas estaban tirados por todas partes. Se vio cómo se las llevaban en camiones. La gente temía recoger los hábitos por temor a que la detuvieran.”¹²

El gobierno del Tíbet en el exilio informó de que había testigos de palizas y del uso de medios letales de la policía contra los manifestantes en muchas otras localidades. Según los informes, a Alak Khaso Rinpoche, del monasterio de Rongp, en la comarca de Rebgong, lo golpearon brutalmente, rompiéndole una pierna, además de causarle daños en los pulmones, la vista y el oído, tras una protesta pacífica de monjes y seglares el 17 de abril.¹³

⁹ TCHRD, “At least three Tibetans shot dead in Kardze Protest,” 18 de marzo.

¹⁰ TCHRD, “Pictures of Tibetans shot dead by Chinese armed police on 3 April 2008,” 17 de abril.

¹¹ RFA “Tibetan Nuns Jailed, Detained” 12 de mayo de 2008.

¹² International Campaign for Tibet, “More than 80 nuns detained after peaceful protests continue in Kham,” 30 de mayo de 2008.

¹³ TibetNet, 31 de mayo.

Las autoridades chinas no sólo han detenido a monjes, monjas y otros manifestantes, sino que han ido contra cantantes, cómicos, artistas y otras figuras culturales tibetanas que no parecen haber estado directamente implicadas en las actuales protestas,¹⁴ pero que tienen en común su empeño por conservar la cultura tibetana tradicional. En una oleada represiva que comenzó a finales de marzo, las fuerzas de seguridad chinas detuvieron al menos a siete conocidos artistas sin que aún se hayan presentado cargos oficiales contra ellos. Agentes de la seguridad del Estado sin uniformar se llevaron de su despacho en el canal de televisión Qinghai TV de la ciudad de Xining, provincia de Qinghai, a Jamyang Kyi, cantante, presentadora y productora de televisión.¹⁵ Tras mantenerla en régimen de incomunicación al menos un mes, la pusieron bajo detención domiciliaria después de hacerla pagar una cuantiosa multa. Según los informes, Dabe, otro conocido cómico y cantante, fue detenido el 31 de marzo y estuvo recluido un mes antes de quedar en libertad hacia finales de abril, al parecer también después de pagar una elevada multa. Palchenkyab, fundador de una escuela tibetana para nómadas, junto con un maestro de la escuela, Lhundrup, un cantante también maestro de la escuela, y Drolmakyi, popular cantante de música folclórica y oradora, son otros de los artistas que, según los informes, han sido detenidos.¹⁶

A pesar de decenas de relatos de testigos sobre las palizas y la detención de cientos de manifestantes y sobre el uso de medios letales, las autoridades chinas no han facilitado información continuada sobre las protestas, ni han reconocido la muerte de ningún tibetano a manos de las fuerzas de seguridad chinas, salvo la de un “insurgente”. La honda discrepancia entre los informes del gobierno chino y las fuentes tibetanas pone de manifiesto la necesidad de un escrutinio independiente.

Malos tratos bajo custodia y cientos de personas de las que nada se sabe

Las autoridades chinas informaron que 2.566 personas se rindieron a las autoridades gubernamentales el 9 de abril en Lhasa y en la Prefectura Autónoma Tibetana de Gannan. Otras 1.393 estaban detenidas por el gobierno por esa fecha.¹⁷ De las 2.566 que se habían rendido, 2.198 quedaron en libertad, mientras que 368 siguen detenidas sin que se hayan presentado oficialmente cargos contra ellas. De las 1.393 detenidas por la policía, 411 fueron detenidas oficialmente, aunque no se han dado a conocer los cargos que se les imputan. No ha habido información oficial sobre

¹⁴ “China Silences Tibetan Folk Singer Drolmaki”, *Los Angeles Times*, 8 de junio de 2008.

¹⁵ Amnistía Internacional, *desaparición forzada / Temor de tortura o malos tratos* (Índice AI: Asa 17/073/2008)

¹⁶ Esta información fue transmitida por personas en el extranjero a través de familiares y conocidos, y de entrevistas de periodistas extranjeros.

¹⁷Xinhua, 9 de abril.

cuántas de las personas detenidas por la policía han quedado en libertad. Por consiguiente, la información oficial no explica lo que ha sucedido con más de un millar de personas. Desde el 9 de abril no hay actualización oficial del número de aprehensiones y detenciones.

Muchos cientos, tal vez miles de tibetanos y tibetanas languidecen en cárceles o centros de detención sin que el gobierno reconozca públicamente su paradero ni los acuse oficialmente de algún delito común. Numerosos informes fiables afirman que familiares y amigos de personas detenidas no han podido conseguir información de las autoridades sobre su paradero. Cuando los monjes del monasterio de Kirti indagaron sobre el paradero de monjes de otros monasterios de la región detenidos en protestas anteriores, las autoridades locales les dijeron que estaban recluidos en la cárcel de la comarca de Sungchu (Songpan). Sin embargo, al preguntar a funcionarios de esta prisión, éstos negaron que los monjes estuvieran allí.¹⁸

Organizaciones no gubernamentales en el extranjero y el gobierno del Tíbet en el exilio han recibido numerosos informes de palizas y otros malos tratos infligidos a detenidos tibetanos, y de falta de alimentación adecuada y tratamiento médico necesario, unos informes que Amnistía Internacional no puede confirmar de forma independiente. Un monje tibetano en la India, con contactos en la zona de Amdo Dzoegé Shamey, provincia de Sichuan, contaba la experiencia de un grupo de 40 tibetanos de esta región que se encontraban en Lhasa visitando lugares sagrados y fueron detenidos en torno al 13 o el 14 de marzo. El grupo, formado por 17 monjes y 23 seglares, el más joven de unos 7 años y el más anciano octogenario, afirman no haber participado en las protestas. Mientras estuvieron detenidos en Lhasa, la policía china golpeó a uno de los seglares, Sonam Rinchen, a quien posteriormente se llevaron del centro de detención sin que se haya vuelto a saber nada de él. Los otros 22 seglares quedaron en libertad el 10 de abril, mientras los 17 monjes seguían detenidos. Los liberados contaban que los habían sometido a frecuentes palizas u otras formas de maltrato.¹⁹

Un joven tibetano detenido tras los disturbios de Lhasa en marzo afirmó que fue torturado y describió muchas formas de tortura y malos tratos infligidos a otros detenidos.

En la cárcel, un policía tibetano me dijo: “¡Arrodíllate aquí!”. Yo tenía los pulgares atados a la espalda. El policía se sentó [en una silla delante de mí], me puso el pie sobre la cabeza y me pateó con él la frente, me empujó la cabeza hacia atrás y me abofeteó una y otra vez.

¹⁸ Tibet.Net, “Update on Tibet” 26 de mayo.

¹⁹ RFA, “Updates on Tibet” 5 de mayo.

Mientras estaba detenido, conoció a un muchacho de 17 años que dijo a sus compañeros que lo habían torturado para que admitiera delitos que no había cometido. “Había muchas personas con brazos o piernas rotos o con heridas de bala, pero no las llevaban al hospital [...] Vi muchas cosas que hicieron en la cárcel.”²⁰

Las palizas a los manifestantes y los malos tratos a las personas tibetanas detenidas suponen una violación por parte de China del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual nadie puede ser sometido a tortura o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.²¹

Juicios sin garantías

A las personas tibetanas detenidas durante los actuales disturbios se les niega su derecho a un juicio con garantías, incluido el derecho a ser juzgadas ante un tribunal por cargos penales presentados oficialmente. En el pasado, Amnistía Internacional ha documentado un panorama de juicios injustos de tibetanos en los que las autoridades chinas no distinguen entre las personas que han participado en protestas públicas y las que han cometido actos de violencia criminal.²² Los informes oficiales públicos sólo han proporcionado información sobre un reducido número de personas detenidas que han sido acusadas oficialmente y juzgadas, aunque ha habido cientos de personas detenidas desde mediados de marzo de 2008.

Estas detenciones prolongadas sin cargos formales y sin que las personas detenidas accedan a un tribunal violan el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual: “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad.”²³ También violan el artículo 9.4, que dispone: “Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal”.

El 3 de abril, 18 abogados chinos, conocidos por ocuparse de casos políticamente delicados, publicaron una carta abierta ofreciendo asesoramiento legal gratuito a las

²⁰ TCHRD, “Testimony by a Tibetan youth in Lhasa,” 19 de mayo de 2008.

²¹ Véase http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm.

²² Véase nota 6.

²³ El gobierno chino ha firmado, pero no ratificado el PIDCP. Con la firma de un tratado, un Estado reconoce su carácter vinculante y hasta que lo ratifica está obligado a abstenerse de realizar actos que vayan en contra del objeto y el propósito del tratado. El objeto y el propósito del PIDCP es la protección de los derechos civiles y políticos.

personas tibetanas detenidas en relación con los actuales disturbios. Según uno de estos abogados, las autoridades chinas les advirtieron a ellos y a sus bufetes que no se implicaran en los asuntos tibetanos. A dos de los abogados que firmaron la carta, Teng Biao y Jiang Tianyong, se les negó la renovación de sus licencias el 31 de mayo, mientras que se las renovaban al resto de los letrados de su bufete. Al impedir realizar su actividad a los abogados dispuestos a hacerse cargo de las causas de los tibetanos, las autoridades privan a éstos del derecho a elegir su propio asesoramiento legal. Se trata de una violación del artículo 14.3.b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que toda persona acusada de un delito tiene derecho a comunicarse con un defensor de su elección.

La prensa oficial china informó el 29 de abril que 30 tibetanos habían sido condenados por el Tribunal Popular Intermedio de Lhasa, en lo que se describió como “una sesión pública”, a penas de cárcel que iban de tres años a cadena perpetua por cargos de incendio intencionado, atraco, creación de disturbios e incitación a la destrucción de bienes. Según esta información, a los acusados se les permitió elegir asesoramiento legal y se les dio un plazo de diez días para presentar apelación. Sin embargo, uno de los abogados que ofreció asesoramiento legal puso en tela de juicio la asistencia jurídica que habían recibido realmente los acusados.²⁴ La rapidez con que se habían llevado a cabo los juicios y el acto de imposición de condenas hace poco probable que los procedimientos cumplieran las normas mínimas sobre garantías procesales.

Es posible que miles de personas permanezcan detenidas, pero las autoridades no han dado más información de que se hayan presentado oficialmente cargos contra ellas o que vayan a ser juzgadas por un tribunal. Hay informes aislados sobre otros juicios y sentencias, incluidas las de siete monjas condenadas a prisión por protestar en la comarca de Kardze (Ganzi). Sin embargo, al ser preguntado sobre si se había celebrado un juicio, un funcionario del Tribunal Popular de la comarca de Luhuo, el lugar donde, según los informes, las monjas habían sido juzgadas, contestó: “No lo sé [...] No hagan preguntas sobre el juicio.”²⁵

²⁴ “Chinese Court Sentences 30 to Prison in Lhasa Rioting”, *Washington Post*, 30 de abril de 2008.

²⁵ RFA “Tibetans nuns jailed, detained,” 12 de mayo de 2008.

Recomendaciones al gobierno chino

La situación en el Tíbet exige que las autoridades chinas se enfrenten a ella y adopten medidas urgentes para resolver las causas subyacentes a las protestas, que se centran en la sensación de los tibetanos de ser víctimas desde hace largo tiempo de violaciones de derechos humanos, como las restricciones a sus prácticas religiosas, la persecución por ejercer sus libertades de expresión, asociación y reunión, la aplicación de políticas oficiales aparentemente encaminadas a debilitar su cultura e identidad étnica, y la exclusión de las ventajas del desarrollo económico.

Las autoridades chinas deben, con carácter de urgencia:

Permitir el acceso sin trabas a expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y otros observadores independientes para que investiguen la situación de los derechos humanos en la Región Autónoma del Tíbet y las zonas vecinas de población tibetana;

Permitir el acceso sin trabas de los periodistas a las zonas afectadas, y la cobertura transparente del paso de la antorcha olímpica por la Región Autónoma del Tíbet y la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, cumpliendo con las "Olimpiadas libres y abiertas" prometidas en el Plan de Acción Olímpico de Pekín;

Poner de inmediato en libertad incondicional a las personas detenidas únicamente por participar en protestas pacíficas en favor del Dalai Lama, de la independencia del Tíbet o de una mayor autonomía para esta región;

Dar explicaciones sobre todas las personas que han muerto, han resultado heridas o han desaparecido y sobre todas las que han sido detenidas, indicando sus nombres, su paradero y los cargos presentados contra ellas;

Garantizar que todas las personas detenidas pueden acceder sin demora a sus abogados, ver a sus familiares y recibir el tratamiento médico que necesiten, tal como disponen las leyes chinas y el derecho internacional;

Garantizar que toda persona detenida bajo la sospecha de haber cometido actos de violencia sea acusada de algún delito común reconocible y que un tribunal independiente dicte su prisión preventiva, o bien sea puesta en libertad, como exige el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que China ha firmado;

utilizar la fuerza para restaurar el orden y proteger a personas y bienes únicamente cuando sea necesario y de forma proporcionada; en concreto, las fuerzas de seguridad sólo deben utilizar medios letales como último recurso cuando existe una amenaza inmediata para la vida, como disponen las normas internacionales que prohíben la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como las normas establecidas en virtud del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ambos de las Naciones Unidas.